



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
MOSQUERA CUNDINAMARCA

17 de mayo de 2023.

TUTELA: 2023-00772
ACCIONANTE: WILLIAN FERNEY RODRIGUEZ FEO
ACCIONADO: CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.
Acción de Tutela.

I. ASUNTO

Resuelve el Juzgado la acción de tutela impetrada por el señor **WILLIAN FERNEY RODRIGUEZ FEO** quien actúa en nombre propio contra la entidad **CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.**, por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición.

II. ANTECEDENTES

1. Aspectos Fácticos.

Manifiesta el accionante que el día 30 de marzo de 2023, elevó ante **CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO** derecho de petición en interés particular, con el propósito de obtener información del registro de todos los pagos y movimientos financieros que ha tenido desde el primer artículo comprado con fecha 28 de abril de 2022 hasta la última compra con fecha 28 de agosto de la misma anualidad, junto con la tabla de amortización.

Indica que a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna a su derecho de petición.

2. Pretensiones.

Solicita el accionante se conceda el amparo constitucional a su petición y se responda de fondo, de forma congruente, resolviendo en su integridad punto por punto.

3. Actuación Procesal.

Mediante providencia de fecha 08 de mayo de 2023, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó la notificación a la entidad **CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.**, para que ejercieran su derecho de defensa; igualmente se vinculó a la entidad **COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.**

4. Respuesta de ALKOSTO S.A.

Solicita se desvincule por cuanto la tarjeta de crédito de ALKOSTO es aprobada y emitida por la sociedad COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A., quien es la entidad que debe dar respuesta al derecho de petición invocado por el accionante.

4. Respuesta de COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.

Por su parte, señaló que frente a los hechos de la acción de tutela, la entidad brindó una respuesta a cada una de las petición formuladas por el accionante, el día 17 de mayo de 2023, la cual fue remitida al correo willianfeo34@gmail.com.

III. CONSIDERACIONES

La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo dirigido a proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos señalados en la ley, y sólo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional ha establecido que el núcleo esencial del derecho de petición comporta los siguientes elementos: (i) **Formulación de la Petición**, esto es, la posibilidad cierta y efectiva de dirigir solicitudes

respetuosas a las autoridades y a los particulares, sin que les sea dado negarse a recibirlas o a tramitarlas; (ii) **Pronta Resolución**, es decir, la definición de fondo del asunto planteado dentro de un término razonable, que por regla general ha sido definido por el Código Contencioso Administrativo en 15 días, lapso en el que, si no es posible resolver definitivamente la petición, deberá informarse el momento en que tendrá lugar la resolución de fondo de lo pedido, señalando las razones que motivan la dilación; (iii) **Respuesta de Fondo**, o sea, la resolución definitiva de lo pedido, en sentido positivo o negativo, de forma **clara**-esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión-,**precisa**-de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas, **congruente** -de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado- y **consecuente con el trámite surtido** -de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o *ex novo*, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente ; y (iv) **Notificación al Peticionario**, es decir, la información efectiva del solicitante respecto de la decisión que, con motivo de su petición, se ha producido (Sentencia T 48 de 2016).

Por otra parte, la Corte Constitucional en la Sentencia 146 de 2012, a través del desarrollo jurisprudencial del derecho de petición, sintetizó las reglas para su protección, en los siguientes términos:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994.”.

Respecto al término para contestar las peticiones, señala el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, lo siguiente:

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

IV. DEL CASO CONCRETO

Solicita el accionante **WILLIAN FERNEY RODRIGUEZ FEO** se proteja el derecho fundamental de petición y en consecuencia, se ordene al entidad **CORBETA S.A Y/O ALKOSTO**, proceda a responder la petición remitida el día 30 de marzo de 2023, la cual a la fecha no ha sido respondida.

En cuanto al **derecho de petición**, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, conlleva a que la autoridad o particular requerido emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, respetando el término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía no sólo implica que la solución al *petitum* se emita dentro del plazo oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de fondo, esto es, que resuelva la cuestión sometida a estudio, bien sea favorable o desfavorable a los intereses del

petionario; *ii*) ser congruente frente a la petición elevada; y, *iii*) debe ser puesta en conocimiento del petionario. Entonces, si la respuesta emitida por el ente requerido carece de uno de estos tres presupuestos, se entenderá que la petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho fundamental.

Así las cosas, una vez revisados los documentos aportados al plenario, se observa que el señor **WILLIAN FERNEY RODRIGUEZ FEO** en efecto, radicó derecho de petición ante la entidad **CORBETA S.A. y/O ALKOSTO** el día 30 de marzo de 2.023, en la cual solicita información respecto a los pagos y movimientos financieros que ha tenido desde la primera compra con fecha 28 de agosto, junto con la tabla de amortización; se le suspenda el reporte ante la central de riesgo, y se le explique las razones por las cuales no se encuentra a paz y salvo, y porque concepto le están cobrando el dinero adicional, por parte de ALKOSTO KTRONIX.

En contestación por parte de la entidad ALKOSTO a través de su representante legal, informó que la tarjeta de crédito aprobada al accionante es de la **COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.**, por lo tanto, es dicha entidad la que debe dar respuesta a la petición del accionante.

A su turno la **COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.**, en respuesta a la presente acción de tutela, indicó que el día 17 de mayo de 2023 se pronunció sobre cada uno de los pedimentos elevados por el actor, remitiéndose al correo willianfeo34@gmail.com.

En la respuesta otorgada se informa al accionante respecto de las transacciones realizadas, para lo cual adjuntan el siguiente pantallazo:

Fecha	Concepto	Establecimiento	Cuotas totales	Valor
28/04/2022	COMPRA NACIONAL	K TRONIX MOSQUERA MOSQUERA CUN	6	\$ 2.689.000,00
8/05/2022	COMPRA NACIONAL	K TRONIX MOSQUERA MOSQUERA CUN	1	\$ 785.900,00
10/07/2022	COMPRA NACIONAL	K TRONIX MOSQUERA MOSQUERA CUN	6	\$ 744.900,00
10/07/2022	COMPRA NACIONAL	K TRONIX MOSQUERA MOSQUERA CUN	4	\$ 275.900,00
17/08/2022	COMPRA NACIONAL	K TRONIX MOSQUERA MOSQUERA CUN	4	\$ 1.549.000,00
28/08/2022	COMPRA NACIONAL	K TRONIX MOSQUERA MOSQUERA CUN	6	\$ 699.900,00
Valor total adeudado a capital				\$6.744.600,00

Informa igualmente que la Compañía, el día 13 de abril de 2023 le ofrece al actor un acuerdo de pago, el cual consta de realizar un abono de \$672.000 para el día 18 de abril de 2023 y así quedar en saldo cero; que debido a que realiza el pago por parte del activante y cumple con el acuerdo pactado, a la fecha el crédito se encuentra en saldo cero y en estado de cancelación.

En cuanto al reporte ante las centrales de riesgo, aclaran que la entidad reporta mensualmente el comportamiento de pago, sea positivo o negativo a las centrales de riesgo, se adjunta pantallazo:

Ante las centrales de riesgo el estado de tu obligación No. *****8277, registra así:

- CIFIN Y DATACRÉDITO: Registra Cancelada Voluntariamente al 30 de abril de 2023, esto de acuerdo a tu comportamiento de pago.

De igual manera, se allegaron las constancias de remisión al derecho de petición, remitida al correo willianfeo34@gmail.com, conforme el siguiente pantallazo:



En este orden tenemos, que la entidad **COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.**, aportó al plenario junto a la contestación de la tutela, la respuesta dirigida a la accionante, respecto a la petición de fecha 30 de marzo de 2.023, por lo que puede advertirse que la entidad accionada y vinculada emitieron un pronunciamiento de fondo frente a todas y cada una de las solicitudes allí contenidas, y en las cuales se verifica respuesta a los requerimientos del accionante.

Para lo cual se debe traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T 369 de 2013, en donde se pronunció frente al alcance de la respuesta generada al derecho de petición, señalando:

“Es deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas o abstractas, como quiera que condenan al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos. Ha señalado igualmente la jurisprudencia, que la respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación brindada y en los efectos de la misma.

(...)

Se concluye entonces, que el derecho de petición consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La jurisprudencia constitucional

también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”.

Se establece pues el deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas o abstractas, como quiera que condenan al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si se considera que en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros derechos subjetivos”.

De lo anterior, podemos establecer que la respuesta debe comprender, una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el petente ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses, y sin que se condene al peticionario a una situación de incertidumbre, que le impida aclarar sus inquietudes.

Con base a lo expuesto, puede determinarse, que la respuesta emanada por la **COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.**, cumple las condiciones para tenerla como una contestación de fondo, de cara a la solicitud contenida en la petición de 30 de marzo de 2023, respecto a a solicitudes realizadas por parte del accionante.

Bajo estos postulados, la respuesta emanada frente a la solicitud del quejoso, cumple las condiciones para tenerla como una contestación de fondo, en tanto se atendió el requerimiento, situación que debe tener en cuenta el petente, en el sentido que, **la respuesta no implica aceptación de lo solicitado**, y comporta una respuesta de fondo, siempre que se indiquen de forma fundada, las razones para no acceder a lo solicitado.

En el caso de estudio, tomando en cuenta las directrices jurisprudenciales esbozadas en esta considerativa, no pude determinarse que la respuesta emitida al derecho de petición que es materia de esta tutela, comporte en una negativa a suministrar la información, ni

contiene evasivas ni indicaciones abstractas que dejen en la incertidumbre a la entidad accionante.

En este panorama, no se observa vulnerada la garantía cuya protección se persigue a través de la presente acción, en la medida que el ente accionado atendió la petición de la promotora de la acción, lo que conduce a declarar la carencia actual del objeto, por hecho superado, toda vez que la entidad accionada acreditó haber dado respuesta a la solicitud de la quejosa, no habiendo por tanto razón para emitir una orden al respecto.

En cuanto a la carencia actual del objeto por hecho superado, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T 70 – de 2018, manifestando:

“La jurisprudencia constitucional ha reiterado que el objeto de la acción de tutela consiste en garantizar la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, ha reconocido también que en el transcurso del trámite de tutela, se pueden generar circunstancias que permitan inferir que la vulneración o amenaza alegada, ha cesado. Lo anterior implica que se extinga el objeto jurídico sobre el cual giraba la acción de tutela y del mismo modo que cualquier decisión que se pueda dar al respecto resulte inocua. Este fenómeno ha sido catalogado como carencia actual de objeto y, por lo general, se puede presentar como hecho superado, o daño consumado.

Con relación a la categoría de carencia actual de objeto por hecho superado, el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 lo reglamenta en los siguientes términos:

“Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.

La Corte Constitucional, en numerosas providencias, ha interpretado la disposición precitada en el sentido de que la carencia actual de objeto por hecho superado, tiene lugar cuando desaparece la afectación al derecho fundamental invocado. Así, desde sus primeros pronunciamientos, este Tribunal ha venido señalando que si bien la acción de tutela es el mecanismo eficaz para la protección de los derechos fundamentales cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, si la perturbación que dio origen a la acción desaparece o es superada, entonces, el peticionario carece de interés jurídico

ya que dejan de existir el sentido y objeto del amparo, razón por la cual habrá de declararse la carencia actual de objeto por hecho superado. En tal sentido, manifestó la Corte en la sentencia T-570 de 1992 que:

“La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo que[,] si la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en el vacío” .

Se verifica entonces que la accionada, remitió al tutelante la respuesta de fondo, razón por la cual se tendría cumplido este requisito. Cesando en consecuencia la afectación a su derecho fundamental de petición, por lo que se declarara que la presente acción de tutela carece de objeto por hecho superado.

Finalmente, por considerar que la entidad **CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO**, no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, se exonerará de responsabilidad.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Civil Municipal de Mosquera – Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: DECLARAR que la presente acción de tutela contra la vinculada **COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A** promovida por el señor **WILLIAN FERNEY RODRIGUEZ FEO**, carece de objeto, **POR HECHO SUPERADO**, en virtud de lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: EXONERAR DE RESPONSABILIDAD respecto a la presente acción constitucional a las entidades **CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.**, por no encontrar de su parte vulneración al derecho fundamental del accionante.

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta providencia a las partes de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMÍTASE el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, si no fuere impugnada.

Notifíquese y cúmplase

ASTRID MILENA BAQUERO GUTIÉRREZ
JUEZA

Firmado Por:
Astrid Milena Baquero Gutierrez
Juez
Juzgado Municipal
Civil 000
Mosquera - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cb48488beaa4b0bec8c85188b956d5a3c798529fa5eb4b8108de84be7e1a8464**
Documento generado en 17/05/2023 03:40:13 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>